



CADIZ: VOLADURA DE LA RESIDENCIA SANITARIA

LA Residencia Sanitaria del Instituto Nacional de Previsión «Fernando Zamacoia» era una parte importante del paisaje urbano de la ciudad. Hace pocas semanas se ha procedido a su demolición, y junto con ella han volado muchos cientos de millones de pesetas de los sufridos contribuyentes españoles.

En la actual estructura sanitaria de la provincia este centro ocupaba un lugar clave. Realizando la prestación ambulatoria para buena parte de la provincia, era a su vez único servicio hospitalario asequible para muchos miles de gaditanos. Sus 248 camas para los asegurados tenían un alto valor en una provincia cercana al millón de habitantes, y en la que las diversas instituciones públicas y privadas no mantienen ni siquiera 3.500 camas.

Aplicando los baremos indicados por la Organización Mundial de la Salud, faltan algo más de 6.500 camas para que la población esté atendida, en el aspecto sanitario, de una forma mínimamente satisfactoria. En este contexto, la demolición de la Residencia es el último acto de una cadena irreversible que ha provocado y aún provocará fuerte quebranto en la atención médica a la provincia.

1954 es la fecha de entrada en servicio de este centro hospitalario. Situado a la entrada de la ciudad, centralizaba los servicios sanitarios para una gran parte de la provincia. Diariamente, en los autobuses que convergen en la capital, llegaban allí numerosas personas proceden-

tes de pueblos situados hasta cien kilómetros al interior, en busca de consultas especializadas y tratamiento hospitalario.

A medida que la población creció y la demanda de prestaciones sanitarias se fue generalizando, la Residencia iba quedando pequeña. Por ello, en 1970 se formalizaba el plan de ampliación de sus instalaciones con la intención de cubrir más discretamente las necesidades de ese momento. Esto no era una solución definitiva, simplemente una medida de urgencia para paliar el grave déficit de camas que la Seguridad Social tenía en la provincia.

LAS OBRAS, TERMINADAS

Los municipios de Puerto Real y San Fernando ofrecen por esas fechas unos terrenos donde podrían levantarse secciones del hospital, con lo que se descongestionaría éste y se mejoraban los servicios durante un plazo prolongado.

Estas últimas soluciones quedan en el saco de los recuerdos y se pasa a ampliar las instalaciones, sin acometer paralelamente obras de descentralización alguna. Durante los dos años que van a durar los trabajos, los enfermos sufren las molestias correspondientes. Junto a las dependencias donde están acogidos se desarrollan las obras para levan-

tar dos nuevas alas con los problemas de ruido, polvo y tensión derivados.

Tras dos años, las obras se pueden dar por terminadas. Al mismo tiempo se ha equipado una habitación piloto en el último piso del núcleo antiguo, y todo parece indicar la próxima puesta en funcionamiento del conjunto. Los rumores nacidos en 1971 que hablaban de que la Residencia se caía han sido marginados al ver cómo las obras proseguían con normalidad y ningún comunicado hacía mención a esa posibilidad. De la noche a la mañana, los gaditanos se enteran de que las nuevas alas, al construirse, han dañado los cimientos del anterior edificio, al que ahora se ve apuntalado y de que peligró el conjunto.

Desde hacía algún tiempo se venía practicando el régimen de concierto con clínicas privadas que absorbían el cupo de enfermos sin lugar en la Residencia. Desde el momento del apuntalamiento, este número aumenta, ya que parte del viejo edificio queda inutilizado.

Pronto se empezará a hablar de que es necesario demolerlo en su totalidad. En un principio nadie dio crédito a estos rumores. Los mismos empleados pensaban que habría formas de salvar la situación o que incluso podría aguantarse allí mientras se creaba una nueva. Esta parecía ser la solución más factible y definitiva. De hecho, en La Línea se había construido una en poco

más de seis meses y por tanto era posible repetirlo.

Contra todo cálculo, el 21 de septiembre de 1973, dos años después de que los técnicos sabían que la construcción debía ser demolida, el traslado se hace necesario. Los enfermos son enviados apresuradamente a una clínica privada, que desde hacía unos meses había aumentado en 240 su capacidad de internamiento. Desde entonces los enfermos y la mayor parte del equipo de la Seguridad Social aguardan instalados allí a que la nueva construcción esté levantada.

Con este motivo, las quejas habituales contra el Seguro se han multiplicado, dado la evidente insuficiencia y provisionalidad de la nueva instalación y del equipo asistencial.

Ahora, un año después del desalojo, el cuerpo antiguo ha sido demolido, concluyendo así una fase de este «pintoresco problema».

Durante los años de funcionamiento de la Residencia las quejas por los servicios allí prestados se multiplicaban. La medicina ha progresado en estos veinte años, y lenta-

mente la gente iba haciendo uso habitual de este servicio en los momentos de enfermedad. La repercusión de esta mayor demanda fue doble: deterioro progresivo de los servicios al no mantener un crecimiento correspondiente a la demanda que se hacía de ellos y congestión espacial al prolongarse el período de internamiento y multiplicarse las intervenciones quirúrgicas realizadas.

El malestar provocado por esta carencia tomó cuerpo en 1973. Una serie de cartas fueron enviadas al Consejo Provincial de Trabajadores, para que se les diera curso, por multitud de centros de trabajo representados en sus enlaces y jurados. Se manifestaban en los siguientes términos:

«Entre nuestras misiones como representantes sindicales está la de participar y aportar iniciativas en orden a la gestión y gobierno de las instituciones y entidades de la Seguridad Social.

Por parte de un gran contingente de trabajadores, a los que representamos, se nos ha encargado que nos hagamos eco de los rumores y situa-

ciones que de hecho se están dando en orden a la irregular prestación que de la asistencia sanitaria estamos recibiendo en Cádiz.»

Tras exponer el historial de la Residencia pasan a indicar algunos de los problemas que provienen del estado de cosas:

- Prolongación de las bajas por enfermedad con el consiguiente aumento de los gastos para los trabajadores afectados.
- Los enfermos que se ven obligados a alargar su intervención requieren un tratamiento más prolongado, una mayor medicación, con lo que ello cuesta y lo que pueda suponer para el Organismo.
- La prisa por dar el alta y efectuar la convalencia en su domicilio con el riesgo inherente.
- La falta de atención y negligencia en los servicios tanto de la Seguridad Social como concertados.

Por todo ello, solicitan que «se realicen las gestiones oportunas para que nos sean aclarados todos esos rumores que circulan y las consecuencias antes relatadas mediante una nota oficial de quien corresponda y las condiciones en que estaremos atendidos los trabajadores en el futuro».

Ninguna nota oficial siguió a la carta. Los rumores siguieron y sólo al consumarse los hechos se apreció su magnitud.

De esta experiencia resaltan dos hechos. El primero, arriba indicado por los trabajadores, la falta de información que ha caracterizado la política de la Seguridad Social durante los últimos años.

El segundo es indicado por los trabajadores de esta forma: «Proponemos a ese Consejo Provincial que se constituya una comisión, formada por trabajadores representantes sindicales, que inspeccione este asunto para poder informar ampliamente a quienes no sólo son sujetos pasivos de estos servicios sino financiadores en una gran medida de todo el sistema de la Seguridad Social.»

La Seguridad Social está mantenida por las cotizaciones de trabajadores y empresas. Quizá cabe preguntarse si éstos no tendrán ningún derecho a la hora de exigir responsabilidades.

Campsa protestas y peligros

El «B. O. de la Provincia de Cádiz», del 8 de agosto de 1974, expone a información pública la petición de CAMPESA para llevar a efecto el proyecto de la obra de ampliación de su factoría en Puntales (Cádiz).

Esta factoría posee ahora mismo unos treinta tanques enclavados en una zona densamente poblada. Alrededor suyo se encuentran las barriadas de Puntales (5.000 personas); Cerro del Moro (6.000); Loreto (5.000); Barriada de la Paz (15.000).

Intercalados con estas zonas residenciales se hallan instalaciones tanto o más peligrosas que la anterior: depósitos de aceite, base naval, central térmica y depósito de tabacos.

El proyecto de CAMPESA se realizaría ganando al mar unos 14.000 metros cuadrados en los que se procedería a levantar una serie de nuevos depósitos. Este proyecto ha merecido la crítica y la repulsa de todas las asociaciones existentes en la zona. Unas, de padres de familia y de vecinos, considerando que esta industria es ya de por sí altamente pelgro-

sa, como para incrementarla con más elementos. Otras, recreativas, considerando que con esta nueva factoría se anularían las posibilidades de esparcimiento de sus miembros, que en sus ratos libres dedican unas horas a la pesca.

De hecho es preciso reconocer que esta factoría está considerada como altamente peligrosa, y que en caso de un accidente, aparte de los daños a los barrios vecinos, incomunicaría por completo a los vecinos de toda un área. Por otro lado, el lugar en que piensan extenderse es actualmente lugar de pesca y navegación para numerosas embarcaciones recreativas, afición, que a falta de otras, es muy apreciada por muchos trabajadores gaditanos.

Las asociaciones opinan que toda esta industria debería ser trasladada fuera de la ciudad. Para ello proponen como posible lugar de asentamiento terrenos cercanos al oleoducto Rota-Zaragoza.

A. S.